

1998-11-13 – Reforma -

Carlos Medina Plascencia -

Pesos por votos.

Un balance preliminar sobre las elecciones del domingo pasado en Sinaloa, Puebla, Tlaxcala y Michoacán nos permite advertir con claridad que la presencia activa de cacicazgos regionales reflejan el endurecimiento de sectores priístas que se oponen a la transición democrática del país.

Es cierto que los procesos electorales tienden a ser cada vez más transparentes y creíbles. Pero no puede apelarse a esa premisa para suponer que no existen intereses por parte de grupos locales que todavía recurren a prácticas supuestamente superadas, como la compra de votos y a la manipulación de los electores.

Tampoco puede afirmarse que las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales en los Estados gocen de un cien por ciento de credibilidad. En el caso de Puebla se ha demostrado cómo el gobernador Manuel Bartlett controla el organismo electoral.

En Sinaloa hubo desayunos para inducir al voto, se permitió votar a ciudadanos sin credencial de elector, hubo retrasos en la instalación de casillas, se intimidó y amenazó a representantes de los partidos diferentes al oficial. En algunas casillas hubo *taqueo* de urnas y en el cómputo oficial el número de votos es mayor al del número de electores de la lista nominal.

En Tlaxcala el colmo: los priístas oficiales acusaron a su antiguo compañero de partido, y candidato perredista a gobernador, de cometer fraude en perjuicio del partido oficial.

La compra de votos es una denuncia que ha ido de la mano con el abstencionismo. Generalmente, entre más alto es el nivel de participación ciudadana, es más alta la oportunidad que tiene la oposición de obtener la victoria. A ello obedece el interés priísta de inhibir la participación de los ciudadanos en las urnas, a fin de tener un mayor margen de maniobra que le permita manipular la intención del voto.

Aunque no sea una práctica generalizada y fácil de demostrar, es un dato que no puede soslayarse, sobre todo porque el propio gobierno federal se ha encargado de generar programas que dentro del rubro del “gasto social” han servido al mismo tiempo para beneficiar a los candidatos priístas, como lo han sido el Pronasol y el Procampo.

El gobierno federal ha creado ese tipo de programas con el supuesto afán de combatir a la pobreza y el rezago social. Se trata de un círculo vicioso: quienes menos recursos tienen, son producto de la aplicación de políticas económicas equivocadas, mismas que han causado crisis financieras una y otra vez. Esa es una de las razones por las que hace poco se presentó una iniciativa de reforma constitucional que permita que los titulares del Poder Ejecutivo puedan ser sometidos a juicio político, a fin de que respondan por sus acciones de frente a los ciudadanos.

Es innegable que la mayor parte los electores no distinguen a quien corresponde la responsabilidad de la crisis económica y financiera del país. Los caciques regionales se han encargado de difundir que la oposición es la causante de la crisis, sobre todo entre las personas que tienen menor acceso a diferentes fuentes de información, que son los más pobres. Que si gana la oposición vendrá el caos y la incertidumbre, afirman los voceros de la línea dura priísta.

En algunas encuestas, los ciudadanos que declaran haber aceptado dinero, despensas o regalos por parte de los priístas, dicen que no comprometen la intención de su voto, pero aceptan que si votan por quien les dio el obsequio, en el futuro podrán gozar de prebendas similares.

La inversión en votos puede hacerse a través de ideas y dinero. La primera es lenta, porque requiere adquirir un cierto nivel de conciencia política o de conciencia ciudadana, algo que sólo da la ética personal y la perseverancia, mientras la segunda consiste en vender el voto al mejor postor, ya sea por un interés económico, individual o de grupo (lo cual no quiere decir que se realice de una forma consciente, sino que la mayoría de las veces es producto de la manipulación).

En otro esquema están los mecanismos para persuadir o inducir al voto a través de la propaganda, en forma directa (la que hacen los partidos) o indirecta (la que hacen los gobiernos en favor del partido del cual emanaron).

El trabajo del gobierno también influye porque los electores lo tienen al tacto, pero la propaganda negra puede fijar la idea de que un buen gobierno no ha hecho nada, o culparlo de algo que no le corresponde (como sucede a menudo con los gobiernos emanados de Acción Nacional).

En cambio, el buen manejo de la propaganda puede hacer creer que todos estamos bien, aunque realmente sea lo contrario (basta recordar el sexenio de Carlos Salinas, elogiado durante su mandato y denostado ahora). No se olvide tampoco la puntada del "liberalismo social", a través del cual se buscaba combatir

a la pobreza. En realidad, lo que hizo fue establecer mecanismos de control político de los grupos marginados, a fin de garantizar el triunfo en la elección presidencial de 1994.

La existencia y crecimiento de caciques regionales es un hecho que nos debe alarmar, porque está probado que no están dispuestos a mantener un nivel honesto de lucha electoral. Si a eso le sumamos el interés de algunos subordinados del Ejecutivo de impulsar ese tipo de prácticas, además del endurecimiento del discurso en contra de la oposición por parte del propio Presidente Zedillo, significa que estamos entrando a un proceso de sucesión presidencial enturbiado, en el cual la oposición se encuentra ya en desventaja.

Como resultado del análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1999 deben establecerse mecanismos que no permitan más esa manipulación de gasto social con fines electorales y partidistas.